



FRAUDE MILLONARIO EN SEGALMEX

López Obrador confirmó la información revelada por Mexicanos Contra la Corrupción, acerca del desfalco en Segalmex, mediante la colocación de fondos públicos en una financiera ubicada en Chiapas.

Fraude multimillonario en SEGALMEX

ROMÁN QUEZADA

El Presidente López Obrador confirmó la información revelada hace un año en MCCI, acerca del presunto desfalco en Segalmex, mediante la colocación de fondos públicos en una financiera ubicada en Chiapas

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana comenzó cuando un administrador colocó fondos públicos de la dependencia en una financiera.

Aunque no mencionó los nombres del funcionario ni de la financiera, el presidente se refería a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, y a Corporación en Asesoría Financiera (CORAFI).

Desde julio de 2021, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba a CORAFI, una empresa encabezada por el empresario chiapaneco René Dávila de la Vega, por establecer un fideicomiso que contenía cerca de 800 millones de pesos provenientes del presupuesto de Segalmex.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dichos recursos fueron invertidos en la bolsa a través de certificados bursátiles fiduciarios privados.

“Esa financiera ofrecía, supuestamente, más intereses. El que dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, ni con el pretexto de que van a tener más rendimientos”, dijo el presidente.

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha vuelto el protagonista de un supuesto desfalco de las arcas públicas en este sexenio. El órgano descentralizado, que se desprende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estaba pensado para buscar la autosuficiencia alimentaria de



Segalmex fue diseñada por el Gobierno mexicano para ser la heredera de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una paraestatal que se dedicó a garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica.

la población. Ahora es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos desvíos millonarios. "Hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación", ha admitido el presidente esta semana en su conferencia de prensa. La Secretaría de la Función Pública ha informado que existen 22 denuncias, por las que se han abierto 15 investigaciones.

Segalmex fue diseñada por el Gobierno mexicano para ser la heredera de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una paraestatal que se dedicó a garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica. La intención era fusionar a Liconsa y Diconsa, dos organismos que había hasta entonces que se encargaban del abasto de alimentos y leche. Cuando tomó posesión del cargo, López Obrador nombró al frente de Segalmex a Ignacio Ovalle, un político de carrera en el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y antiguo amigo suyo. Ovalle duró poco más de dos años como titular. Bajo su administración el organismo se sumergió en múltiples acusaciones de corrupción.

La Secretaría de la Función Pública ha informado este jueves que acompañan 22 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y por empresas involucradas, ante la Fiscalía, "por la presunta comisión de delitos, los cuales podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, así como a Diconsa y Liconsa". Por esas denuncias se han abierto al menos 15 carpetas de investigación, entre otras cosas, por uso ilícito de atribuciones y facultades.

En su tercera entrega de informes de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación reveló que el monto invertido ascendía a 950 millones de pesos. De esos 950 millones, 850 correspondían al presupuesto de Liconsa y 100 al presupuesto de Segalmex.

Las inversiones comenzaron en febrero de 2019, cuando se colocaron 150 millones de pesos del presupuesto de Liconsa y continuaron en abril, junio y septiembre de ese año.

Las últimas dos compras se realizaron en marzo y junio de 2020 por 50 y 100 millones de pesos respectivamente.



850

MILLONES DE PESOS otorgó Segalmex entre 2019 y 2020 en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios habían participado en empresas fantasma.

La ASF señaló que estas operaciones fueron ilegales debido a que ambas instituciones no tenían control sobre lo invertido, lo que contraviene los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales.

El portal Animal Político publicó un oficio en el que se muestra que el exdirector general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, autorizó con su firma las inversiones bajo la justificación de "autogenerar a futuro recursos financieros propios". Y, pese a ello, ese funcionario federal permanece en la estructura de gobierno. En abril del presente año Ovalle fue removido de la dirección de Segalmex y nombrado director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación.

Fue hasta enero de 2022 que Liconsa pudo recuperar la totalidad de los 830 millones de pesos invertidos en los certificados

bursátiles. Segalmex también recuperó los 100 millones invertidos con el presupuesto de esa institución en una fecha indeterminada. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de los 10 millones de pesos que se generaron de rendimientos.

De acuerdo con las declaraciones del presidente López Obrador, actualmente las autoridades investigan las operaciones de CORAFI, ya que se habría detectado que la financiera ha seguido el mismo modus operandi con otras dependencias.

"Esta financiera hizo lo mismo en otros casos y se está investigando porque no pueden estas financieras actuar sin el respaldo de un banco... porque por lo general estas financieras no tienen nada, son puros negocios de papel".

Corporación en Asesoría Financiera Sur S.A. de C.V. SOFOM ENR (CORAFI) fue constituida en 2009 por los empresarios



René Dávila de la Vega y Alejandro Díaz Ceballos Rubio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Actas obtenidas por MCCI muestran que la compañía ha cambiado en dos ocasiones de razón social; la primera en 2010 cuando se registró como Financiera Corafi S.A. de C.V. y la segunda en 2019 cuando cambió su nombre a Corafi Asesores Ejecutivos S.A. de C.V.

En 2013, Corafi se presentaba como una compañía especialista en el otorgamiento de crédito a trabajadores del sector público

En 2013, Corafi se presentaba como una compañía especialista en el otorgamiento de crédito a trabajadores del sector público

Aunque actualmente su sitio web se encuentra en mantenimiento, MCCI pudo acceder a los registros guardados en Wayback

Machine, una herramienta que permite consultar cómo se veía la página en años anteriores.

Aquí, la compañía se presenta como Grupo Corafi, un grupo empresarial conformado por empresas como Financiera Corafi S.A. de C.V., IMI Civiles del Sur S.A. de C.V. y Corafi Inmobiliaria del Sureste S.A. de C.V. Estas dos últimas sociedades han sido las encargadas de construir desarrollos de lujo como Country Valley y Valle Verde en Tuxtla Gutiérrez y Miraluna en Tulum.

Dávila de la Vega también es accionista de al menos otras cinco sociedades que operan en las industrias inmobiliarias y restauranteras: Fármacos Consulting del Sur S.A. de C.V., Inmobiliaria Redad & R Sur S.A. de C.V., Administradora Gourmet Subo S.A. de C.V., Antistes Consorcio S.A. de C.V., y Grupo Gourmet la Pergola S.A. de C.V.



El extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el uso ilícito de recursos públicos. De acuerdo con el informe de la FGR, René "G" autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles en junio de 2020, con un valor de 100 millones de pesos durante el periodo del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020.

La Auditoría Superior de la Federación señaló además que, en los primeros dos años de este Gobierno, Segalmex no fue capaz de acreditar en qué utilizó más de 10.000 millones de pesos. El pasado abril los señalamientos estallaron y presidente relevó de su cargo a Ovalle, pero lo designó como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación, según indicó en un comunicado.

Poco después de la destitución de Ovalle, en abril de este año, la FGR anunció que investigaba la compra de 100.000 títulos bursátiles adquiridos entre febrero de 2019 y junio de 2020 con recursos del organismo por un valor de 100 millones de pesos. "Dicha autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que, como señala el Estatuto Orgánico de Segalmex, el director general no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados", decía el comunicado de la Fiscalía. En ese caso ha sido vinculado a proceso Gavira Segreste, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.

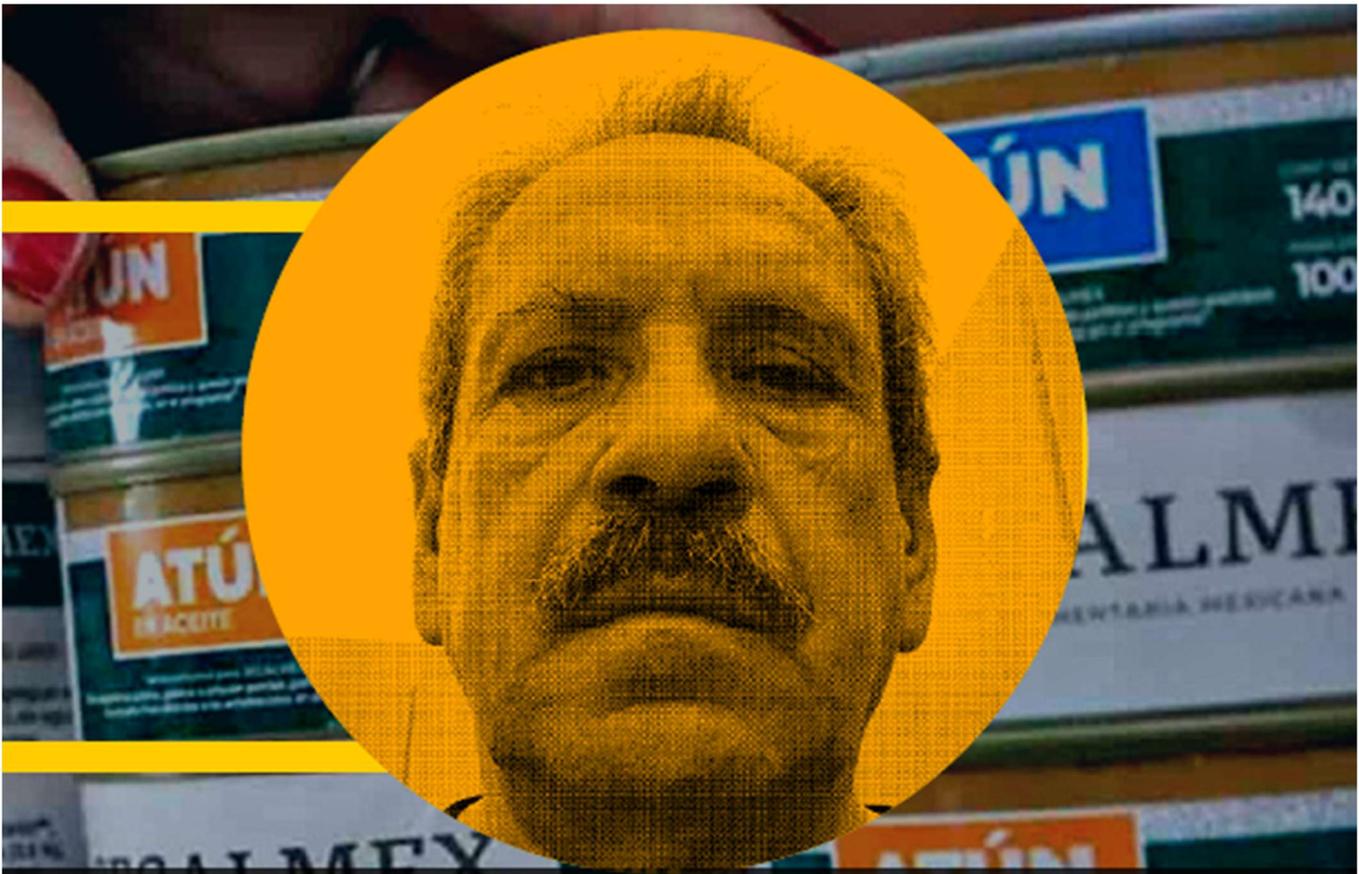
Gavira estuvo también involucrado en una red opaca que intercambió alimentos por petróleo de Venezuela, que movió millones de euros en todo el mundo sin dejar rastro. El entramado, pensado para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista, recibió la ayuda del Gobierno mexi-

cano. Segalmex era el organismo que iba a venderle alimentos a una empresa mexicana que fungiría de intermediaria. Eso al menos establecía un documento que llevaba la firma de Gavira, pero que el exfuncionario desmintió.

Segalmex otorgó contratos millonarios a filial de empresa "fantasma" en 2020 pese a ser investigada por la FGR. Se trata de Marhel, una filial de B-Eminent Inc. de México. Esta última fue incluida por el SAT en su listado de empresas que operaban con presuntas operaciones inexistentes. Marhel recibió más de 20 contratos en Segalmex por un monto superior a los 60 millones de pesos para la venta de productos del mar (Foto: Cuartoscuro)

Grupo Marhel figura como una división de B-Eminent Inc. de México, la cual supuestamente participaba en una red de lavado de dinero en la que se enviaban alimentos a sobreprecio a Venezuela, mediante el programa de abasto CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Desde octubre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catalogó a B-Eminent como una empresa que operaba con supuestas operaciones inexistentes. Posteriormente, el 29 de junio de 2020, el SAT la incluyó en su listado de empresas "fantasma".



Pese a ello, en ese año su filial Marhel recibió más de 20 contratos en Segalmex por un monto superior a los 60 millones de pesos para la venta de productos del mar y otros alimentos, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

B-Eminent Inc es una empresa creada en septiembre de 2014 en Ensenada, Baja California. Según MCCI, forma parte una red compuesta por diversas compañías mexicanas y extranjeras que han participado en la venta de despensas con productos de "baja calidad". A través de las llamadas "Cajas CLAP", el régimen venezolano vendía los productos a precios subsidiados.

De acuerdo con la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con las despensas CLAP se triangulaban operaciones mediante empresas "fantasma" internacionales, entre las que figuraba B-Eminent, por lo que la FGR la investigó por presunto lavado de dinero y en 2019 congeló sus cuentas.

Entre las indagatorias realizadas, la UIF detectó transferencias de 7 millones 936 mil pesos de una empresa de Tussef Samill Abou Nassif, pareja de la vicepresidenta de Venezuela, hacia B-Eminent Inc. de México, de acuerdo con un reportaje de Reforma publicado en julio de 2019.

Fue así que desde ese año, el SAT incluyó a B-Eminent en su lista de empresas con supuestas operaciones inexistentes. Cuando en 2020 finalmente fue catalogada como una empresa "fantasma", su filial Marhel recibió 21 contratos en Segalmex por un monto de 67 millones 174 mil pesos como parte del Programa de Abasto Rural, coordinado por Diconsa.

De acuerdo con los contratos consultados por MCCI, todas las compras realizadas entre abril y noviembre de 2020 a Marhel fueron por adjudicación directa. Cerca de 44.8 millones de pesos fueron por compras de dos mil 400 toneladas de azúcar estándar a granel o envasada. El tercio restante (11.6 millones) fueron para la adquisición de latas de atún de 140 gramos.

Asimismo, dicha empresa recibió contratos de más de 7.5 millones de pesos para la venta de 269 mil 510 paquetes de res y pollo deshebrado, con un contenido de 250 gramos, además de 120 toneladas de frijol por más de 3.2 millones de pesos.

Grupo Marhel fue creado en Mazatlán, Sinaloa, en 2019. Según actas del Registro Público de Comercio, el apoderado de la empresa es Martín Armando Botello Ruvalcaba, quien también fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) entre los años 2003 y 2011, además de ser apoderado de B-Eminent.

De igual manera, las dos hijas de Botello Ruvalcaba son accio-



nistas, al igual que su esposa, quien figura como representante de Marhel en las órdenes de compra de cada uno de los 21 contratos otorgados por Segalmex, también conocida como la "Consaupo de la 4T".

De acuerdo con su sitio web, se describe como "una empresa joven, emprendedora y comprometida con tu bienestar". Vende productos del mar -como atún- y productos del campo, como granos, cereales, harinas y alimentos cárnicos. Tiene presencia internacional en países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Panamá, Japón, China, Corea, Emiratos Árabes, Israel y España.

En la conferencia mañanera del 27 de julio del año en curso, un reportero le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el supuesto desfalco en Segalmex por nueve mil millones de pesos, en el que se vio involucrado René Gavira, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Sin embargo, el mandatario federal se limitó a decir que hay una investigación del gobierno y denuncias desde hace más de un año. "Le voy a pedir al secretario de la Función Pública que venga y explique sobre este fraude y la forma en la que se está actuando", comentó.

En Abril pasado, René Gavira fue vinculado a proceso por el caso de Segalmex. El ex jefe de Administración y Finanzas de la Seguridad Alimentaria Mexicana es señalado por la presunta compra ilegal de 100 mil títulos bursátiles con recursos públicos del organismo

El ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el uso ilícito de recursos públicos, informó la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

De acuerdo con el informe de la FGR, René "G" autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles en junio de 2020, con un valor de 100 millones de pesos durante el periodo del 14 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2020.

Para la concreción de esta compra recurrió al uso de recursos públicos pertenecientes al patrimonio de Segalmex a través de una Casa de Bolsa, por lo que se calificó como "ilícita" dicha acción, toda vez que contradice a lo estipulado en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras.

"Dicha autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que,

como señala el Estatuto Orgánico de Segalmex, el Director General no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados"

El pasado 6 de abril se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que la defensa de René "C" solicitó que se resolviera la situación jurídica del imputado. A raíz de ello, el juez que lleva el caso dictó vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Asimismo, se concedió un plazo de seis meses para realizar las investigaciones complementarias.

En ese sentido, la FGR advirtió que este es solo uno de los tantos casos que actualmente se encuentran bajo investigación por el uso indebido de los recursos públicos que fueron asignados a Segalmex.

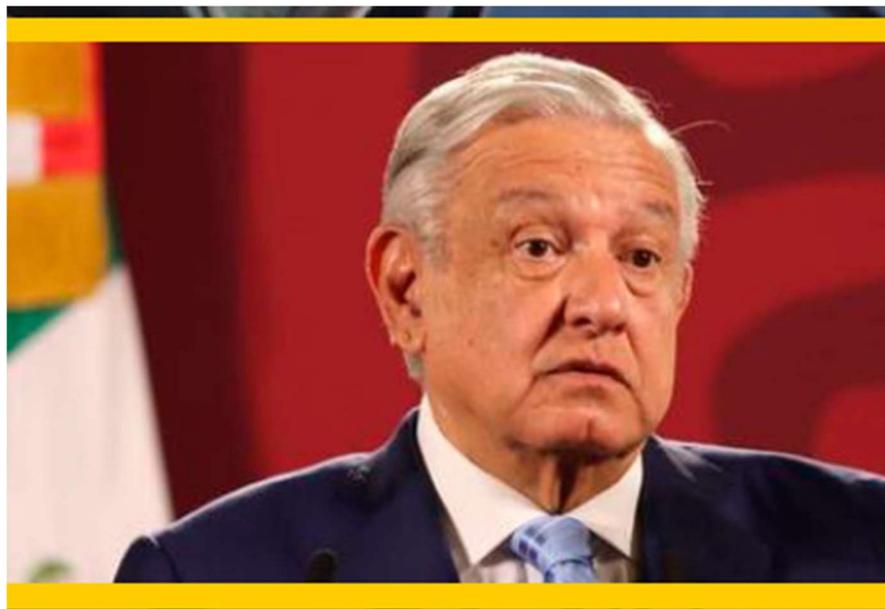
Cabe señalar que en febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una auditoría en la que se "determinaron observaciones por 5,640.6 millones de pesos, por concepto de adquisición y pagos sin soporte documental" de varios productos alimenticios, como frijol, maíz, leche, así como subsidios de arroz y trigo. Lo anterior como parte de su gestión financiera y manejo de efectivo, según lo observado en el reporte ejecutivo de la Cuenta Pública 2020. Tras los señalamientos de presunta corrupción y mal manejo de los recursos públicos, René "C" presentó su renuncia ante la dependencia federal en julio de 2020.

A raíz de lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una investigación por los presuntos actos de corrupción en Segalmex, que no solo involucran a René "C", pues también se mencionaron las supuestas asignaciones directas a empresas fantasma.

De acuerdo con una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en julio de 2021, Segalmex otorgó 797 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas en las que sus socios habrían participado en empresas fantasma "y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la Sedatu". Dichos contratos fueron firmados durante la gestión de René "C".

Las empresas involucradas, según MCCI, son: Fruverloz, Properloz, Gentsai Hoon y Denoter, Soluservicios Globales NXX, Professional Bright XRW, las cuales recibieron contratos por parte de Segalmex para compra de tarimas, insecticidas, raticidas, costales de polipropileno, cubrebocas y lonas blancas.

De igual manera, se indica que cuatro de las seis empresas comenzaron sus actividades entre 2015 y 2019 y no habían recibido contratos gubernamentales hasta los otorgados por Segalmex, según lo consultado de Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. **M**



AMLO PROMETE CASTIGO A RESPONSABLES DE FRAUDE EN SEGALMEX.

La investigación de Segalmex se da por supuestas inversiones bursátiles ilegales que se pagaron con recursos públicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá impunidad en el fraude cometido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Durante la conferencia de prensa, el mandatario dijo que el tema ya se investiga por parte de las autoridades y destacó que se castigará a todos los responsables.

"Empezó porque se descubrió de que un

administrador puso dinero, no sé si de Diconsa o de Segalmex, en una financiera. Esa financiera ofrecía supuestamente más intereses. El que dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer", señaló.

Aunque López Obrador promete no permitir impunidad en el caso, el presidente omitió mencionar a Ignacio Ovalle, quien fue removido de la dirección de Segalmex y ahora es el nuevo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas 22 carpetas de investigación por supuestos actos de corrupción en Segalmex.

Se trata del caso de René Gavira Segrestre, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, quien es acusado por efectuar inversiones bursátiles ilegales con recursos públicos.

Medios detallan que uno de los casos investigados por la FGR está relacionado con el pago de 811 millones de pesos a 13 empresas por contratos de leche sin que éstas cumplieran con la entrega del producto.

En mayo de este año, Ovalle Fernández, declaró al Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio con el cual se autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles.